

Bogotá, D.C.
543

MEMORANDO

PARA: **DIANA MARCELA ZARABANDA SUAREZ**
Jefe Oficina Asesora Jurídica Secretaría Distrital de Gobierno

DE: **CARLOS HERNANDO MACÍAS MONTOYA**
Alcalde Local de San Cristóbal

ASUNTO: **REPARACIÓN DIRECTA 2025-142**
AUTO ADMISORIO
ANTECEDENTES – CONTESTACIÓN DE DEMANDA

**JUZGADO TREINTA Y TRES (33) ADMINISTRATIVO
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ**

DEMANDANTE: **MAURICIO ANDRÉS GARZÓN OLIVOS Y OTROS**

DEMANDADOS: BOGOTÁ-DISTRITO CAPITAL-ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
SECRETARIA DE GOBIERNO-SECRETARÍA DISTRITAL DE
PLANEACIÓN ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL, ENEL
COLOMBIA S.A E.S.P, PABLO ENRIQUE RAMÍREZ PARRA Y EDNA
CECILIA LEAL GARCÍA

RADICADO: **ORFEO No. 20251800178343**

Cordial Saludo,

En atención al memorando de la referencia, en que su despacho solicita los antecedentes administrativos con el objeto de dar contestación a la demanda, nos permitimos dar respuesta como sigue a continuación:

FRENTE A LAS PRETENSIONES:

Nos oponemos a todas y cada una de las pretensiones formuladas en la demanda, en la que se pretende una responsabilidad solidaria por parte de esta Alcaldía Local, frente al presunto daño sufrido por el demandante y su núcleo familiar.

Lo anterior, por cuanto no se encuentra acreditado un daño antijurídico imputable a la Alcaldía Local de San Cristóbal. En particular, no se configura responsabilidad administrativa ni patrimonial a título de falla en el servicio, puesto que el control urbanístico ejercido por la Alcaldía Local fue realizado oportunamente y se enmarca en los límites normativos establecidos; no se circunscribe a la esfera del mantenimiento o prestación de servicios públicos domiciliarios -redes eléctricas o de internet-; como tampoco es garante o responsable de la ejecución de obras de terceros.

Además, debe resaltarse la inexistencia del nexo de causalidad entre la conducta atribuida a la entidad y el daño alegado, debido a la naturaleza del proceso policivo – administrativo sancionatorio – y la autonomía funcional de las Inspecciones de Policía, así como la ausencia de cualquier acción u omisión atribuible a este ente local, que haya generado el siniestro.

Adicionalmente, los hechos que originaron el daño derivan de la actuación de particulares y de una ejecución deficiente del procedimiento técnico por parte de la víctima, lo cual impide imputar responsabilidad a esta entidad. No puede hablarse, por tanto, de solidaridad ni de concurrencia de culpas. Por estas razones, se solicita que las pretensiones declarativas y de condena sean denegadas en su totalidad frente a la Alcaldía Local de San Cristóbal.

FRENTE A LOS HECHOS

El despacho de la Alcaldía Local de San Cristóbal se abstiene de pronunciarse respecto a los hechos relatados en el escrito de demanda, toda vez que son ajenos a nuestra competencia y conocimiento, en atención a que hacen referencia a la estructuración de un **accidente laboral** por la descarga eléctrica en medio de una instalación de redes externas e internas **HFC – internet de Claro-** en el predio ubicado en la Calle 22A SUR No. 7-56, de los cuales, por no tener ningún de participación ni injerencia, no nos constan.

No obstante lo anterior, aduce el demandante en el hecho 10 que las características de la construcción del predio acrecentaron los factores de riesgo al no guardar las distancias debidas con la red eléctrica de media tensión. Así mismo, refirma dicha premisa en los hechos 30, 31, 32, 37; 104 y 105 donde aduce que la construcción del predio se realizó sin licencia y que no hubo intervención de vigilancia y control; atribuyendo a partir de allí una presunta, pero infundada, intención de responsabilidad de esta Alcaldía Local, en el entendido que asevera el demandante que, si este 2se *hubiese ejercido oportunamente, de manera muy probable, no hubiese sucedido el hecho.*” Frente a estos hechos, se contesta como **NO ES CIERTO**.

En primera medida, porque revisadas las condiciones en el terreno, se evidencia: (i) que el tendido eléctrico cumple con la distancia mínima requerida en la norma técnica¹. (ii) SI se realizaron visitas de inspección y vigilancia de control urbanístico (19 de abril de 2022; 07 de febrero de 2024), que, aunque dieron cuenta de la existencia de una presunta infracción urbanística en el predio; que posteriormente dieron inicio a actuaciones **administrativas sancionatorias** bajo los expedientes No. 2022544490101386E y 2024544490100137E que cursan en la Inspección 4D de Policía de esta localidad; da cuenta también de las gestiones de la administración, pero además, este hecho por sí mismo, no acredita una relación de causalidad con el daño generado. Debido a la naturaleza sancionatoria del proceso policivo. Por tanto, no hay nexo de causalidad entre la construcción del predio sin licencia y la responsabilidad de esta Alcaldía Local.

Sea oportuno señalar que, conforme al último control urbanístico realizado en el predio, del que da cuenta el **INFORME TÉCNICO No. CPS-263-2025-056 14 de junio de 2025**; el predio en cuestión aporta licencia de reconocimiento de la construcción, que fue otorgada mediante resolución N. 11001-2-24-1206 de la Curaduría Urbana No 2 de Bogotá, con fecha de ejecutoria del 26 de febrero de 2025. Con lo cual se acredita, no solo la responsabilidad del constructor de la obra, en este caso sus propietarios, sino, además, unas condiciones mínimas respecto de la norma técnica, en especial énfasis la distancia del tendido del cableado eléctrico de la vivienda, aspectos cuyo cumplimiento permitieron la legalización de las obras por parte de la autoridad competente y, como consecuencia de ello, el saneamiento de la infracción a partir de la licencia de construcción en modalidad de reconocimiento.

Es menester manifestar al despacho que la Alcaldía Local de San Cristóbal **NO ES GARANTE NI RESPONSABLE** de las actuaciones de los particulares, en este caso de los propietarios del predio al desarrollar una obra; ni tampoco de la presentación de servicios públicos, a saber, redes de energía eléctrica, así como tampoco de redes de telefonía y de internet, cuya custodia, instalación, condiciones de seguridad e intervención, corresponde a las respectivas entidades prestadoras de servicios públicos. Así mismo, se clarifica que la Alcaldía Local no otorga permisos ni licencias de construcción, aspecto privativo por disposición legal a las Curadurías Urbanas.

EXCEPCIONES

Como argumentos de defensa, se desarrollarán los siguientes: (I) inexistencia del nexo de causalidad: a.) competencia y procedimiento de la Alcaldía Local de San Cristóbal sobre vigilancia y control urbanístico; esto es, el control urbanístico está reglado y su alcance está previamente definido; la entidad no puede ejecutar acciones más allá de lo establecido en su marco normativo b.) De la

¹ INFORME TÉCNICO No. CPS-263-2025-056 14 de junio de 2025- Área de Gestión Policiva y Jurídica de la ALSC

autonomía funcional de las Inspecciones de Policía. (II) culpa exclusiva de la víctima. (III) integración de litisconsorcio.

I. INEXISTENCIA DEL NEXO DE CAUSALIDAD - INEXISTENCIA DEL DAÑO OCASIONADO POR PARTE DE LA ALCALDÍA LOCAL

La responsabilidad patrimonial del Estado por falla en el servicio requiere, conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado, la acreditación de tres elementos esenciales: (i) la existencia de un daño antijurídico; (ii) la imputación de este a una entidad pública por acción u omisión; y (iii) la existencia de un nexo de causalidad entre el hecho imputado a la administración y el daño alegado. Este vínculo no puede inferirse automáticamente por la sola proximidad institucional o por una imputación genérica de deberes, sino que debe estar **jurídica y fácticamente demostrado**.

Aunque la parte demandante afirma la existencia de un daño, **no se evidencia el vínculo causal necesario para responsabilizar a la Alcaldía Local de San Cristóbal**, ya que no existe una conducta activa ni pasiva atribuible a esta administración que haya producido directa o indirectamente el accidente objeto de la demanda.

El demandante parte de la premisa que, las características de la construcción del predio acrecentaron los factores de riesgo al no guardar presuntamente las distancias debidas con la red eléctrica de media tensión, sin aportar prueba, dictamen o estudio técnico que así lo confirme; y que, si este ente local hubiese ejercido oportunamente la inspección vigilancia y control del predio donde ocurrió el accidente, *de manera muy probable, no hubiese sucedido el hecho*. No obstante, se demostrará como esta premisa es falsa y no existe nexo de causalidad. Sin embargo, **esta premisa parte de una comprensión incorrecta tanto del alcance de la función de control urbanístico como de la realidad técnica y normativa que rodeó los hechos**.

En primer lugar, **la entidad sí cumplió con su deber legal de control: el 19 de abril de 2022**, antes de la ocurrencia del hecho dañoso, se realizó una visita de verificación al predio, en desarrollo de la función de IVC urbanístico. Producto de esa visita, se rindió el respectivo informe técnico de verificación y se corrió traslado a las Inspecciones de Policía para que fuesen éstas, en virtud de la facultad sancionatoria contemplada en los artículos 206 y 209 de la Ley 1801 de 2016, quienes aperturaran el expediente y adelantaran el respectivo proceso policivo. Esto demuestra que no hubo omisión por parte de la entidad y que, por el contrario, se actuó dentro del marco normativo correspondiente.

Ahora bien, el **control urbanístico es esencialmente reglado** conforme a los artículos 135 y 136 de la Ley 1801 de 2016 -Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, cuando se detectan construcciones sin licencia, la administración puede iniciar procesos policivos – proceso verbal

abreviado, que como toda actuación administrativa, debe garantizar el debido proceso y se desarrolla por una serie de etapas, conforme lo dispone la Ley 1801 de 2016; en los que se valoran las infracciones y, eventualmente, se imponen **sanciones de tipo pecuniario o se ordena la demolición de lo construido sin el lleno de los requisitos establecidos en la Ley**. Sin embargo, la competencia para declarar la infracción y sancionar, no recae sobre esta autoridad local. Así las cosas, pese a evidenciarse en la inspección ocular, una presunta infracción, **esto no le otorga a la Alcaldía competencia para ordenar a los propietarios de la obra que no continúen la ejecución, ni para evaluar y sancionar situaciones técnicas relacionadas con seguridad eléctrica**, pues estos son aspectos ajenos a su órbita funcional.

En este sentido, cabe preguntarse: **¿cómo puede afirmarse la existencia de un nexo de causalidad entre una presunta infracción urbanística tramitada por vía policiva y un accidente derivado, presuntamente, de una falla eléctrica?** La respuesta, conforme al marco legal, es que **no existe**, en tanto **las consecuencias técnicas o de seguridad derivadas de la ejecución de los servicios desplegada por la víctima y de la obra ejecutada por particulares son atribuibles exclusivamente a éstos**.

Lo anterior se refuerza, con el hecho de que **la supuesta causa del accidente –la cercanía del tendido eléctrico a la vivienda– no es cierta**. En el marco de la verificación de campo, se estableció que **la instalación eléctrica cumple con las distancias mínimas exigidas por la norma técnica vigente**:

IMAGEN 3: MEDICION RED DE ENERGIA



IMAGEN 3: MEDICION RED DE ENERGIA



“De acuerdo con el registro fotográfico de la visita se concluye lo siguiente con respecto al predio:

1. NO hay intervención de obra.

2. De acuerdo con el requerimiento se hace visita para hacer estudio de redes eléctricas que afectan el predio arrojando este que en el poste de red eléctrica ubicado en el costado occidental del predio marca 2.90 mts. A centro de radio del poste y respecto al lindero del predio y la fachada de este avanza 0.60 mts. Quedando una luz libre entre red eléctrica y la fachada del predio desde el segundo hasta el cuarto piso de 2.30 mts.

3. Que en el poste de red eléctrica del costado oriental del predio marca 2.90 mts. Y la fachada de este avanza con un volado de 0.60 cms quedando una luz libre de la fachada del predio del segundo al cuarto piso y entre la red eléctrica de 2.30 mts.

4. Que de acuerdo con reglamento RETIE la distancia mínima de la fachada de una construcción con respecto a las redes eléctricas que alimentan los domicilios sean de baja o media tensión que afecten los predios es de 2.30 mts.

5. Al verificar la distancia de los cables o red de media tensión que están en la parte superior del poste estos sobresalen 1.00 mts. más sobre la vía, dando una distancia entre fachada aprox. 3.30 sobre el poste oriental y 3.30 sobre el poste occidental.

6. De acuerdo con lo anterior, el predio en mención cumple con las distancias mínimas requeridas

por la norma RETIE” (INFORME TECNICO No. CPS-263-2025-056 14 de junio de 2025- Área de Gestión Policiva y Jurídica de la ALSC)

En efecto, los **postes y el cableado no vulneraban el marco técnico de seguridad**, por lo que no existe ninguna relación entre el control urbanístico y el presunto origen del daño. Más aún, cuando la construcción en cuestión fue **saneada mediante una licencia de reconocimiento** otorgada mediante resolución N. 11001-2-24-1206 de la Curaduría Urbana No 2 de Bogotá, con fecha de ejecutoria del 26 de febrero de 2025., otorgada en los términos del Decreto 1077 de 2015 y del Decreto 1783 de 2004. Esta licencia tiene dos implicaciones importantes:

1. Que **los propietarios o responsables de la obra son los únicos obligados por su ejecución**, lo cual refuerza la tesis de que, en caso de probarse elementos de responsabilidad, estos recaen sobre el mal manejo de la víctima y la responsabilidad de los particulares.
2. Que para el otorgamiento de la licencia se verifica, entre otros requisitos, el cumplimiento de **condiciones mínimas de seguridad, incluyendo la relación entre el predio y el entorno urbano y técnico**. Por tanto, **incluso si la construcción se legalizó posteriormente, ello implicó una validación técnica que descarta cualquier irregularidad estructural** que pudiera atribuirse a la cercanía del cableado.

En suma, no se puede imputar responsabilidad a la Alcaldía Local de San Cristóbal por un daño cuyo **origen no está relacionado ni causal ni jurídicamente con sus competencias**, y cuya **producción**

responde a factores técnicos y conductas privadas fuera de su control. Además, debe recordarse que la función de control urbanístico **no incluye la supervisión técnica de instalaciones eléctricas**, ni puede suspender obras unilateralmente sin agotar el proceso policivo legalmente establecido.

Por último, debe resaltarse que los procesos policivos no son decididos directamente por la Alcaldía Local, sino por las **Inspecciones de Policía**, las cuales actúan con plena **autonomía funcional**, según lo dispuesto en el artículo 206 y 209 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Es decir, las decisiones adoptadas por las Inspecciones de Policía no comprometen la responsabilidad de la Alcaldía ni pueden considerarse actos propios de ésta.

A continuación, se detalla el procedimiento de vigilancia y control urbanístico y la autonomía funcional de las inspecciones de policía:

a. COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO DE VIGILANCIA Y CONTROL URBANÍSTICO

De conformidad con el procedimiento de Inspección, Vigilancia y Control en Obras y Urbanismo de la Secretaria Distrital de Gobierno, con código GET-IVC-P043, política de operación, numerales 7 y 13, se establece:

“7. En caso de observarse en el ejercicio de la actividad de inspección y vigilancia hechos que puedan constituir infracción a la Ley 1801 de 2016, u otras normas vigentes fuera de la actividad de obras y urbanismos, se informará para lo pertinente a la dependencia competente.

13. Al no permitirse el ingreso a la obra se deben realizar las siguientes actividades:

- a. describir el sitio y lo observado*
- b. diligenciar el formato técnico de visita y/o verificación – Control urbanístico GET-IVC F034, en el cual señala que no se le permitió el ingreso*
- c. se debe radicar informe del operativo con el fin de que el Profesional Especializado 222-24 competente realice el reparto a la inspección de policía para continúe con el trámite de acuerdo con el procedimiento verbal abreviado en caso de comportamientos contrarios a la convivencia”*

Visto lo anterior, se manifiesta al despacho que en el ejercicio del control urbanístico que ejerce esta Alcaldía Local, se realizó vista de verificación el 19 de abril de 2022 en la CALLE 22A SUR No. 7-56, del cual se rindió el informe técnico No. 40. En concordancia con el procedimiento descrito, se consignó lo observado al momento de la visita y se concluyó:

*“De acuerdo a la visita de inspección realizada el día 19 de abril de 2022, con el fin de verificar la Resolución de desistimiento No. 11001-1-21-3113 de fecha 28 de diciembre de 2021, Una vez en el sitio se observa que Si se ha realizado obras recientes en este predio; La construcción es de 4 pisos de vetustez menor a 3 años. Con base a lo expuesto se determina que Si hay infracción por Régimen de obras.
Se calcula el área de infracción teniendo la base de datos de la Secretaria de Planeación Distrital "SINUPOT", la cual es de 62.9 m² por cada piso; es decir: $62.90 \times 4 \text{ pisos} = 251.60 \text{ m}^2$
La vetustez se verifica en la foto de Google Maps, del mes de marzo del año 2020; fecha en la cual el predio tenía construido dos pisos (Sic)”*

El anterior informe fue remitido por competencia al Profesional 222-24 de Inspecciones de Policía de San Cristóbal y, por reparto, correspondió a la Inspección 4D de esta localidad, bajo el expediente No. 2022544490101386E.

Así las cosas, se colige que esta Alcaldía Local ejerció el respectivo control urbanístico, dando cuenta de una presunta infracción cuyo trámite en virtud de la facultad sancionatoria contemplada en los artículos 206 y 209 de la ley 1801 de 2016 y en concordancia con el comportamiento contrario tipificado en el artículo 135.4.A ibidem, corresponde las Inspecciones de Policía. Así mismo, se evidencia que el control urbanístico se ejerció antes (**19 de abril de 2022**) de la fecha del accidente de descarga eléctrica que fundamenta la presente acción (**30 de junio de 2022**).

Posteriormente, este despacho realizó nueva visita de verificación del 07 de febrero de 2024 al predio ubicado en la CALLE 22A SUR No. 7-56, cuyo INFORME TÉCNICO No. 244-022024 después de ser sometido a reparto, correspondió a la Inspección 4D de esta localidad, bajo el expediente 2024544490100137E.

En último lugar, se trae de presente que la responsabilidad de desarrollar obras con sujeción a lo observado en normatividad vigente y tramitar la respectiva licencia de construcción, es de responsabilidad exclusiva del propietario del bien y/o responsable de las obras.

b. DE LA AUTONOMÍA FUNCIONAL DE LAS INSPECCIONES DE POLICÍA

La facultad sancionatoria es el poder legítimo que tiene el Estado para imponer sanciones a los ciudadanos que infrinjan normas de convivencia, seguridad y orden público. En el contexto de la Ley 1801 de 2016, esta facultad se ejerce de manera administrativa, principalmente a través de las autoridades de policía, y busca garantizar el respeto a los derechos y deberes ciudadanos, así como la armonía en la vida en comunidad.

Dicha facultad, recae sobre los Inspectores de Policía de acuerdo con los criterios de especialidad, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1801 de 2016. Toda vez que dicha disposición reglamenta las competencias de las autoridades de policía, establece el procedimiento y las sanciones a aplicar. Competencia que está determinada en el artículo 206 numeral 2 de la Ley 1801 de 2016 y de las respectivas sanciones por comportamientos contrarios a la integridad urbanística contemplado en el artículo 135 de la misma normatividad. Siendo en consecuencia, la directriz institucional desde la Dirección Jurídica de la Secretaría Distrital de Gobierno y conforme a las establecido en la Ley 1801 de 2016, que la competencia sancionatoria está en cabeza de los Inspectores de Policía.

Se trae de presente el concepto jurídico emitido por la SDG sobre la competencia de Inspectores para conocer infracciones urbanísticas, mediante memorando con radicado No. **20211800354043** del 11 de octubre de 2021 que, entre otras, resuelve el conflicto de interpretación y aplicación normativa en materia sancionatoria, en el cual se concluye que:

“(…) Si bien el numeral 10° del artículo 11 de la Ley 2116 de 2021 modificatoria de la Ley 1421 de 1993, [...] señala que los Alcaldes Locales deben conocer de los procesos relacionados con violación a las normas sobre construcción de obras y urbanismo e imponer las sanciones correspondientes, determina la competencia, la norma en cita no indica las sanciones a imponer, ni el procedimiento aplicable, por ello, debería aplicarse el procedimiento sancionatorio contenido en la Ley 1437 de 2011, el cual a la postre, no ostenta la especificidad, inmediatez y celeridad que si proporciona el procedimiento establecido en la Ley 1801 de 2016.

De igual manera, al dar aplicación a lo señalado en el numeral 10° del artículo 11 de la Ley 2116 de 2021, nos encontraríamos ante un vacío normativo, como quiera que los señores Alcaldes Locales no tendrían fundamento jurídico para imponer sanciones, toda vez que este tema se encontraba reglamentado en los artículos 1° y 2° de la Ley 810 de 2003 “Por medio de la cual se modifica la Ley 388 de 1997 en materia de sanciones urbanísticas y algunas actuaciones de los curadores urbanos y se dictan otras disposiciones.”, los cuales establecían las infracciones urbanísticas y las sanciones a aplicar, normas que fueron derogadas de manera expresa por el artículo 242 de la Ley 1801 de 2016. Por ende, teniendo en cuenta que la materia se encuentra regulada por la Ley 1801 de 2016 y dando aplicación al criterio correctivo, es esta la norma que debe prevalecer y ser aplicada.

Para finalizar y en respuesta el problema jurídico planteado, corresponde a los Inspectores de Policía conocer de los comportamientos contrarios al urbanismo, aplicar las medidas correctivas y el procedimiento señalado en la Ley 1801 de 2016, dada la especialidad de la norma que reguló estas materias.” (cursivas fuera de texto)

Como se puede observar, las Alcaldías Locales no ostentan la competencia respecto de los procesos sancionatorios por comportamientos contrarios a la integridad urbanística, la cual está contenida en el artículo 135 del Código Nacional de Seguridad y Conveniencia Ciudadana, que se aplicará en atención

a que determina la competencia, el procedimiento y las sanciones que correspondan, que para todos los efectos deberá ser determinada por el Inspector de Policía que conozca del proceso.

Así mismo, se insiste en que las inspecciones de policía son organismos autónomos, administrativa y funcionalmente de las Alcaldías Locales, por lo que no existe una relación de subordinación. En todo caso, una vez realizado el control urbanístico por parte de este despacho y al haber sido remitido el informe técnico a las inspecciones, se deberá seguir con el respectivo procedimiento verbal abreviado del que trata la ley 1801 de 2016, en observancia de las garantías fundamentales del debido proceso.

Ahora bien, en lo que respecta a los expedientes 2022544490101386E y 2024544490100137E que cursaron en la Inspección 4D de Policía de esta localidad; los cuales se adjuntan para conocimiento y fines del despacho, donde además se puede evidenciar los informes de control urbanísticos realizados por la Alcaldía Local, conforme lo descrito en precedencia. En suma, se tiene: al tratarse del mismo predio, sujetos procesales y hechos de presunta infracción, dentro del Expediente 2024544490100137E se dio por terminada la acción con ocasión al fenómeno jurídico de la caducidad de la acción y por consiguiente, el expediente 2022544490101386E corrió la misma suerte. Es decir, fue terminado y se ordenó el archivo de las actuaciones.

De lo anterior se colige la **INEXISTENCIA DEL DAÑO OCASIONADO POR PARTE DE LA ALCALDÍA LOCAL** pues no existe evidencia que permita afirmar que el daño alegado —la descarga eléctrica sufrida por el demandante— haya sido causado directa o indirectamente por la actuación de la Alcaldía Local. No se ha demostrado que la entidad tuviera control, administración o intervención específica sobre el lugar donde ocurrieron los hechos, ni que hubiese omitido alguna obligación legal concreta en relación con la infraestructura eléctrica involucrada.

Es importante recordar que la responsabilidad del Estado no puede presumirse; requiere demostrar concretamente del nexo causal entre la actuación o la omisión de la entidad y el daño sufrido. En este caso, no existe información técnica, peritajes o registros que indiquen que la Alcaldía haya instalado, manipulado o tenido conocimiento previo de presuntas fallas en la red eléctrica del sector, ni que hubiera tenido la competencia funcional o presupuestal para realizar intervenciones de mantenimiento o supervisión sobre dichos elementos. Por tanto, no puede atribuírsele un deber de cuidado que no le correspondía legalmente. De otro lado, el incipiente intento de justificar el nexo de causalidad a partir del control urbanístico sobre la construcción del predio, no logra acreditar el nexo de causalidad, como se expuso en precedencia.

En suma, si no existe una relación de causalidad entre el actuar de la Alcaldía y el daño sufrido, y si tampoco se prueba una omisión que se derive de un deber concreto e incumplido, debe concluirse que

no se configura la responsabilidad de la Alcaldía Local de San Cristóbal, pues el daño no es atribuible a su conducta.

II. CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA

La culpa exclusiva de la víctima constituye una causa extraña que rompe el nexo de causalidad entre el hecho generador del daño y la conducta atribuible al Estado. Esta figura, reconocida ampliamente por la jurisprudencia del Consejo de Estado, exonera de responsabilidad a la administración cuando se demuestra que el daño es atribuible exclusivamente a la actuación de la víctima, quien actúa con imprudencia, impericia o negligencia grave (por ejemplo, **violación del deber de autoprotección**). Por su parte, para que esta se configure, debe tener un **carácter determinante en la producción del daño**.

En el *sub examine*, los hechos descritos por el propio demandante permiten evidenciar que el accidente laboral sufrido por Mauricio Garzón fue producto de una conducta negligente, ejecutada sin las medidas mínimas de seguridad requeridas para una actividad de alto riesgo eléctrico, y sin el uso de los Equipos de Protección Personal -EPP- que, por la naturaleza del trabajo, eran **imprescindibles**. Siendo una conclusión lógica que se desprende, no solo de los hechos relatados en la demanda, sino también en los documentos aportados, los cuales presentan contradicciones sustanciales sobre la secuencia de los hechos, la participación de los integrantes de la cuadrilla y la mecánica del accidente.

En la demanda se sugiere que el demandante – Mauricio Garzón – contaba con experiencia y conocimiento técnico de más de 4 años en la instalación de redes, que requieren protocolos de seguridad básicos. No obstante, a pesar de su experiencia, el propio Mauricio Garzón, según se expone en la demanda, decide entregar sus Equipos de Protección Personal EPP al auxiliar Fredy Melo por instrucción del técnico líder de la cuadrilla (casco, guantes, arnés, eslinga, pretales), aspecto que admite expresamente en el hecho 16.

Esta acción, lo dejó sin la protección básica para continuar cualquier tipo de actividad operativa, incluso si esta consistía en el retiro de residuos, como se indica que era su labor posterior. A partir de ese momento, el demandante continuó ejecutando acciones propias de su labor técnica, sin protección alguna, manipulando elementos de conducción eléctrica, lo cual implica una actuación imprudente, temeraria y autónoma que rompe el nexo de causalidad con cualquier presunta omisión de la administración.

Lo anterior se agrava al observar que, según la narración de los hechos de la propia demanda, el accidente ocurre cuando Mauricio Garzón intenta liberar un alambre mensajero que se había enredado entre unas varillas de construcción ubicadas en la terraza del predio donde se estaba finalizando la

instalación. Al intentar halar dicho cable, decide manipular directamente una de las varillas para liberarlo. Es en este punto donde, según la presunción del propio demandante, se produce un arco eléctrico con una línea de media tensión cercana, lo que desencadena la descarga que le causa la lesión. Este acto al no contar con los EPP mínimos expone su integridad a un riesgo evidente y evitable.

Adicionalmente, la responsabilidad por la dirección y ejecución del servicio recae en la empresa contratista, que es quien organiza la cuadrilla, asigna tareas y debe garantizar el suministro de EPP a todos los miembros de la cuadrilla, así como el cumplimiento de los protocolos de seguridad. En este punto, la Alcaldía Local no se explica porque en una cuadrilla integrada por tres personas, de las cuales dos son de ingreso reciente (45 días para Mauricio Garzón y 15 días para Fredy Melo); una no cuenta con los elementos personales de protección y uno de ellos, el técnico auxiliar – Mauricio Garzón- entregó sus propios elementos de protección personal para dárselos a su compañero auxiliar – Fredy Melo- quien para el día de la diligencia no los tenía y aun así, deciden continuar con la ejecución del servicio.

Sin embargo, la imputación a la Alcaldía Local por vía indirecta no logra subsistir en la medida en que el daño ocurre como resultado de una secuencia de decisiones y ejecución deficiente del proceso de instalación, que atraviesa las órdenes impartidas por el técnico líder, una cuadrilla de tres personas en la que una de ellas no cuenta con los elementos de protección personal, y de las decisiones y actuaciones personales del trabajador – Mauricio Garzón -, ejecutadas en contravía de la diligencia mínima esperada y sin que exista una actuación de la Alcaldía Local inmediata, activa, pasiva o permisiva que pueda ser considerada como causal del daño.

Cabe señalar, además, que los hechos narrados presentan inconsistencias con las pruebas aportadas. Por ejemplo, Fredy Melo, afirma en su declaración del día del accidente, que fue él quien manipuló el alambre mensajero y que estando al fondo de la terraza vio a Mauricio caer, lo que contradice directamente la versión de la demanda según la cual Mauricio habría ejecutado la acción de halar el alambre mensajero.

Esta contradicción no es menor, ya que, por un lado, impide establecer con certeza la secuencia fáctica, debilitando la pretensión indemnizatoria. Y por otro, evidencia que en el supuesto factico expuesto en la demanda y en el expuesto por Fredy Melo, el resultado del daño si era prevenible y completamente evitable con el uso de los EPP. Ya que, si fue Fredy Melo quien haló el alambre mensajero, este no sufrió ningún tipo de daño o descarga ya que contaba con los EPP. Contrario sensu a lo planteado en la demanda, que, bajo el mismo supuesto factico, en el que Mauricio Garzón al haber halado el cable mensajero, sufrió la descarga eléctrica.

A ello se suma que el demandante afirma que Fredy Melo estaba justo detrás de él al momento de la descarga, que lo recibió al momento de su caída, pero este hecho es desmentido por Fredy Melo, quien señala que se encontraba en la parte del fondo de la terraza halando el alambre mensajero. Esta falta

de coherencia en la construcción fáctica no solo erosiona la credibilidad del relato, sino que refuerza la tesis de la imprudencia individual y aislada del trabajador como causa eficiente del daño.

Bogotá - 30 de junio de 2022

Yo, Fredy Alexander Melo Parada, identificado con Cédula de ciudadanía N° 4053684681, me encontraba realizando mis funciones laborales en la dirección Cte 22A sur #7-56, Apdo 302 donde ocurrió el accidente de mi compañero mauricio, en el momento del accidente me encontraba en el 4to piso (terrace) junto a mauricio validando el cable que se había enredado, en el momento fui al fondo del la terraza a bajar el cable que estaba sobrio y en ese momento escuché el estallido y fui a mirar lo que había sucedido y encontré a mi compañero en el suelo, desde ese momento traté de calmar la situación, así mismo desde la terraza pedí a gritos ayuda y el técnico subió a ver lo sucedido y procedió a llamar al sitio, mientras llegan paramédicos me mantengo presente junto a mi compañero, luego llegan ellos y salgo del lugar, a la casa que mi compañero sea atendido y trasladado.

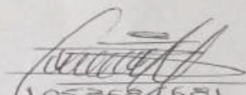

4053684681

Imagen tomada de: anexos finales de la demanda: página 129

Aunado a ello, no puede perderse de vista que en el mismo escrito de demanda se reconoce que no existe certeza sobre la fuente exacta del accidente eléctrico. Se sugiere una posible causa en la formación de un arco eléctrico con líneas de media tensión cercanas, que se crea al momento de haber halado el alambre mensajero enredado en unas varillas, pero al mismo tiempo, al validar el reporte del accidente por la empresa o el reporte de la ARL, junto con la versión del testigo directo, se reconocen otras versiones que divergen en cuanto al mecanismo del accidente.

Por ejemplo, se evidencia que el reporte del accidente del Formato de Investigaciones de Accidentes de Trabajo – FURAT-, la descripción del accidente por parte de la ARL e inclusive el relato de los hechos de Fredy Melo, son coincidentes y evidencian un manejo completamente imprudente por parte del trabajador, como la causa de la descarga eléctrica, al haber transportado un elemento metálico (vigueta metálica) a las líneas de media tensión y, nuevamente, sin los EPP:

El colaborador realizaba sus actividades para instalación de servicios para el Cliente Claro, según la versión de uno de sus compañeros que se encontraba en el mismo sitio con el colaborador accidentado, el cable coaxial usado para llevar el servicio del poste a la casa se enredó con un gancho entre el segundo y tercer piso y esta persona vio un perfil metálico de aproximadamente 3,5 mts de largo en el predio y sin calcular el riesgo lo tomo para tratar de soltar el cable, esto produjo un arco eléctrico con la línea de media tensión que pasa por el predio a una distancia aproximada de 2.0 mts, al contacto con este se genera una descarga eléctrica la cual le ocasiona quemadura en manos y brazos además de lesión inusual aparentemente por donde sale la descarga eléctrica.

Por parte de la Empresa se moviliza la Inspectora de HSE, supervisor de operaciones y Representante Legal para brindar

FIRMA:	
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD
CARGO:	CC <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> N.U <input type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/> PA <input type="checkbox"/>
DECLARACIÓN: Ver anexo	No:
	FIRMA:
PERSONA RESPONSABLE DE REALIZAR EL FURAT	
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD
Diana Carolina Rodriguez	CC <input checked="" type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> N.U <input type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/> PA <input type="checkbox"/>
CARGO: Coordinador HSE	No. 1020744076
FIRMA	FECHA DE DILIGENCIAMIENTO DEL INFORME DEL ACCIDENTE

Imagen tomada de: anexos finales de la demanda: página 124 – reporte accidente FURAT

☐ Animales (vivos o productos animales)

☐ Agentes no clasificados por falta de datos

Descripción del accidente

EL TRABAJADOR SE ENCONTRABA EN UNA PLANTA DE 4 PISOS ESTABA HACIENDO UNA INSTALACIÓN EN EL 4 PISO. MOVIO UN ELEMENTO METÁLICO VIGUETA METÁLICA, AL MOMENTO QUE LA SAGO HACIA LA CALLE ESTE TOCO CON UN CABLE DE MEDIA, EL TRABAJADOR NO PORTABA GUANTES OCASIONÁNDOLE DESCARGA ELÉCTRICA. EL TRABAJADOR CAYO DENTRO DE LA PLANTA DE TRABAJO, OCASIONÁNDOLE QUEMADURAS DE 1 Y 2 GRADO Y DEDO EN GATILLO

Imagen tomada de: anexos finales de la demanda: página 128 – descripción accidente ARL

El elemento diferenciador, cierto y probado, es que el demandante ejecutó las labores de manera imprudente, sin la debida diligencia, pero, sobre todo, sin contar con los EPP que son indispensables para la ejecución de cualquier trabajo, que como bien lo señala el demandante, implica una exposición al riesgo.

Ahora bien, respecto del supuesto fáctico y conforme al **Informe Técnico – Evaluación de Incidente**, que se aporta con este escrito, el escenario o reconstrucción de los hechos, indican dos aspectos claves: en primer lugar, que el arco eléctrico no pudo haberse generado técnicamente según la descripción de los hechos 1 a 23 del escrito de demanda. Es decir, no pudo haberse generado únicamente por halar el cable mensajero – enredado en una varilla., ya que tanto el cable coaxial HFC como el mensajero no están energizados ni forman parte de una red de media tensión. Por tanto, para la creación del arco eléctrico, se requiere el contacto directo de un elemento metálico o conductor con las líneas de media tensión.

En segundo lugar, indica que la única opción técnicamente viable, es el acercamiento de un elemento metálico a las líneas de media tensión. En ese sentido, hay identidad desde el punto de vista técnico de la creación de un arco eléctrico producto de acercar el perfil o vigueta metálica a las líneas de media tensión, con el reporte del accidente FURAT, la descripción del accidente por parte de la ARL y la

versión de los hechos de Fredy Melo – testigo directo del accidente. Aspectos que acreditan un manejo negligente, imprudente y con una relación directa de la víctima con el daño causado, cuyo desenlace se recrudece debido a la ausencia de EPP en dicha manipulación. Esta acción fue autónoma, imprudente y contraria a las prácticas mínimas de seguridad industrial, configurando así una ruptura del deber de autoprotección.

En suma, la conducta de Mauricio Garzón fue la causa exclusiva y determinante del daño, al haber ejecutado labores sin los elementos de protección necesarios, al haber tomado decisiones temerarias en un entorno de alto riesgo eléctrico y al haber incurrido en actuaciones contrarias a los protocolos de seguridad laboral que debía conocer por su experiencia previa. Así, la ruptura del nexo causal por culpa exclusiva de la víctima excluye la responsabilidad de esta Alcaldía Local, pues el daño se produjo exclusivamente por una conducta imprudente, autónoma y determinante del propio trabajador.

III. INTEGRACIÓN DE LITISCONSORCIO

Los hechos que originan la acción están directamente relacionados con la instalación de un servicio de internet, actividad cuya prestación es responsabilidad de la empresa CLARO Colombia S.A., en su calidad de titular y operador autorizado del servicio público de telecomunicaciones. No obstante, para la ejecución material de estas labores, CLARO terceriza la operación mediante la contratación de empresas como ITDNT – Ingeniería en Televisión Digital y Nuevas Tecnologías S.A.S., firma que a su vez contrata al trabajador Mauricio Andrés Garzón Olivos como parte de una cuadrilla técnica.

Pese a dicha tercerización, es evidente que la titularidad del servicio y el control sobre las condiciones técnicas, estándares operativos, protocolos de calidad y continuidad, así como los mecanismos de seguimiento, recaen directamente sobre CLARO Colombia. **Esta empresa no puede, en virtud de la delegación de tareas operativas, sustraerse de su posición como sujeto obligado frente al servicio prestado,** ni desplazar su eventual responsabilidad jurídica a la empresa contratista. En materia de servicios públicos y actividades delegadas, la jurisprudencia ha sido clara al establecer que la empresa principal, en este caso CLARO, continúa siendo responsable por la adecuada prestación del servicio y por los perjuicios que puedan derivarse de su ejecución defectuosa, incluyendo los causados a la cuadrilla que realiza la instalación, incluso cuando media un contrato de tercerización.

El hecho de que el accidente sufrido por el señor Mauricio Garzón haya sido calificado por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) como accidente de trabajo y que haya dado lugar al reconocimiento y pago de una pensión de invalidez por parte del sistema de riesgos laborales, refuerza la caracterización de lo ocurrido como un suceso ocurrido en el marco de una relación laboral formal, en desarrollo de una actividad directamente conectada con la ejecución del servicio público prestado

por CLARO. **Por tanto, el vínculo funcional entre la prestación del servicio, el trabajo encomendado y el accidente es innegable.**

Bajo esta perspectiva, es jurídicamente indispensable la integración en el proceso tanto de la empresa empleadora (ITDNT S.A.S) como de la empresa titular del servicio (CLARO Colombia), no solo por razones de eficacia procesal, sino por la naturaleza misma del litigio y de los derechos comprometidos. Se configura así un **litisconsorcio necesario por la relación sustancial indivisible que vincula a ambas empresas con los hechos del proceso**, pues cualquier decisión que se adopte en torno a la responsabilidad por los daños causados afectará de manera directa e inmediata a los derechos y deberes de ambas partes, **en su calidad de empleadora directa y de responsable del servicio**².

En ese sentido, la omisión de una de las partes sustancialmente involucradas (como lo sería CLARO Colombia, titular del servicio) conduciría a una sentencia ineficaz o incongruente, contraria a los principios de efectividad y de congruencia procesal. La responsabilidad que se pretende establecer — sea directa o solidaria— respecto de los hechos que rodearon el accidente laboral, **no puede juzgarse en ausencia de la empresa principal que dirige, controla y se beneficia del servicio prestado.**

En consecuencia, y dado que la causa del daño alegado se origina en el marco de una actividad ejecutada como parte del contrato de tercerización del servicio de telecomunicaciones, resulta jurídicamente necesario que **tanto ITDNT S.A.S., como empresa empleadora, como CLARO Colombia S.A., como responsable final del servicio y titular del servicio público contratado**, sean parte en el proceso. Solo así podrá resolverse de manera integral y eficaz el conflicto, garantizando los derechos

² **Código General del Proceso - Artículo 61. Litisconsorcio necesario e integración del contradictorio** Cuando el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposición legal, haya de resolverse de manera uniforme y no sea posible decidir de mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos, la demanda deberá formularse por todas o dirigirse contra todas; si no se hiciere así, el juez, en el auto que admite la demanda, ordenará notificar y dar traslado de esta a quienes falten para integrar el contradictorio, en la forma y con el término de comparecencia dispuestos para el demandado.

En caso de no haberse ordenado el traslado al admitirse la demanda, el juez dispondrá la citación de las mencionadas personas, de oficio o a petición de parte, mientras no se haya dictado sentencia de primera instancia, y concederá a los citados el mismo término para que comparezcan. El proceso se suspenderá durante dicho término.

Si alguno de los convocados solicita pruebas en el escrito de intervención, el juez resolverá sobre ellas y si las decreta fijará audiencia para practicarlas.

Los recursos y en general las actuaciones de cada litisconsorte favorecerán a los demás. Sin embargo, los actos que impliquen disposición del derecho en litigio solo tendrán eficacia si emanan de todos.

Cuando alguno de los litisconsortes necesarios del demandante no figure en la demanda, podrá pedirse su vinculación acompañando la prueba de dicho litisconsorcio."

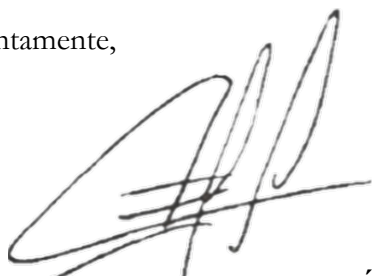
de defensa de todos los sujetos procesales y asegurando la plena validez de la decisión que eventualmente se profiera.

PRUEBAS

Se solicita se tengan como pruebas que se enuncian a continuación y que se podrán descargar directamente del siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1xJhfGbvfuZ4pVtGE_HznQFHla7sOTbqc?usp=sharing

1. Procedimiento de Inspección, Vigilancia y Control en Obras y Urbanismo de la Secretaría Distrital de Gobierno con código GET-IVC-P043
2. Copia del expediente 2022544490101386E que cursa en la inspección 4D de Policía
3. Copia del expediente 2024544490100137E que cursa en la inspección 4D de Policía
4. Concepto de la Dirección jurídica de la Secretaría Distrital de Gobierno - SDG sobre la competencia de inspectores para conocer infracciones urbanísticas, con radicado No. **20211800354043** que resuelve el conflicto de interpretación y aplicación normativa en materia sancionatoria
5. Informe Técnico No. CPS-263-2025-056 14 de junio de 2025- Área de Gestión Políciva y Jurídica de la ALSC y Licencia de reconocimiento de la construcción Resolución N. 11001-2-24-1206 de la Curaduría Urbana No 2 de Bogotá
6. Informe Pericial: Informe Técnico – Evaluación de Incidente


Atentamente,



CARLOS HERNANDO MACÍAS MONTOYA

Alcalde Local De San Cristóbal

Alcalde.scristobal@gobiernobogota.gov.co

Proyectó: Laura Alejandra Guarnizo Cascavita CPS 264-2025 

Revisó: Cindy Stefany Heredia – CPS 035-2025 

Revisó: Fernando Andrés Carvajal Molina CPS-009-2025 